

DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
Adolfo Suárez González

SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA

2 de noviembre de 1977

Buenas noches, señoras, señores:

Vengo a hablarles en momentos de especial preocupación para todos; para ustedes y para el Gobierno.

Y al hacerlo, sólo pretendo explicar cuáles son las acciones y orientaciones de mi Gobierno y cuáles deben ser los compromisos de nuestra sociedad en este tiempo.

Sé con cuanta preocupación vivimos todos los españoles las dificultades económicas.

Sé que todos los hogares y, sobre todo, los más modestos, se encuentran cada día con mayores problemas para acomodar sus ingresos al constante incremento de los precios.

Sé que cada día es más difícil encontrar una colocación para nuestros hijos cuando llegan a la edad de trabajar.

Sé de la angustia de muchas familias donde falta un puesto de trabajo.

Sé de los desvelos de las amas de casa para hacer frente a los problemas que plantea la diaria cesta de la compra.

Y sé de las penalidades de muchas casas en las que repercute la dificultad para el simple pago de una letra y del trance penoso de muchas pequeñas, medianas y grandes empresas que no encuentran un cauce fácil de financiación para sus necesidades vitales.

Sé que todas esas son sus preocupaciones, de los hombres y de las mujeres, de los jóvenes y de nuestros ancianos, porque también son las del Gobierno.

Estamos viviendo una situación económica difícil, incluso grave, pero no insoluble. Y, en todo caso, pienso que hoy se ofrecen mayores grados de optimismo que los que vivíamos hace solamente unas semanas.

Jamás consideré —y así lo he dicho muchas veces— que las cosas resultarían fáciles a partir de las elecciones generales. Con la mayor claridad advertí el trece de junio que las elecciones no iban a resolver por sí mismas los problemas, aunque fueran el primer paso para lograrlo. En efecto, las elecciones han sido el punto de partida para iniciar un diálogo con interlocutores representativos. Y ese diálogo ya dio sus primeros frutos.

Las elecciones del quince de junio iniciaron un nuevo período, ya estabilizado, que culminará una vez aprobada la Constitución que ahora preparan las Cortes. Esta etapa

se ha caracterizado y se caracteriza por el contrasentido de que una situación plenamente democrática en lo político, carece, en cambio, de un contexto general y de unas normas legales democráticas. Nos correspondió gobernar el país en un sistema parlamentario sin tradición parlamentaria reciente. Los partidos políticos, o bien resurgían después de muchos años de silencio, o bien aparecían por primera vez en el escenario de la política nacional. El ejercicio de las nuevas libertades hizo que los problemas se agolparan en nuestras mesas de trabajo como nuevos, aunque muchos tuvieran su origen en épocas anteriores.

Ante tales circunstancias, resultaba evidente que un Gobierno que quisiera enfrentarse a la realidad con sentido práctico y nacional, tenía que conjugar la firmeza de sus decisiones con el equilibrio y la prudencia. Y los aspectos más acuciantes de nuestra vida colectiva sólo podían ser enfocados desde la perspectiva del diálogo.

Desde esta perspectiva fue posible avanzar en el camino de la reconciliación nacional: es posible establecer el marco de las autonomías sin rozar materias constitucionales y promover una urgente reforma fiscal. Desde esa perspectiva han surgido, claras y definidas, las necesarias alternativas de poder.

También desde esa perspectiva de diálogo, que me sigue pareciendo la forma más útil y conveniente de garantizar la convivencia de España, hemos podido llegar a importantes acuerdos, a partir de los cuales será más estable la normalidad democrática de nuestro país y será más fácil contribuir a la consolidación de organizaciones empresariales y de sindicatos responsables y fuertes.

Hoy creo poder hacer ante ustedes, sin falsas ilusiones, una rotunda afirmación de fe en nuestro futuro y transmitirles la seguridad de que nuestro proceso político es irreversible y de que las nuevas formas y modos de convivencia política que estamos creando entre todos, nacen con vocación de permanencia y están asentadas en los firmes cimientos del consenso colectivo y de la concordia nacional.

Pero, si esto es así en el campo político, no ocurre lo mismo en nuestra economía. Se ha dicho con frecuencia que la situación económica es grave. Y se ha dicho con verdad. No hace falta contemplar la elocuente frialdad de las cifras y las estadísticas para comprobarlo. Basta mirar las preocupaciones que señalé al principio y que, desgraciadamente, cada día son comunes a más hogares españoles. Basta repasar el panorama de las empresas que, presionadas por los costes de producción y la dureza de los mercados, están perdiendo el ánimo para sostener las inversiones. Y una sociedad de mercado sin inversiones es una sociedad sin perspectivas de desarrollo y sin apuestas de futuro.

En descargo de las administraciones que en España se han sucedido en los últimos años, hay que decir que esos males no son exclusivos de nuestro país, sino que han sido males comunes, provocados por la crisis general que el mundo ha sufrido desde mil novecientos setenta y cuatro.

En España, la posibilidad de soluciones se vio retrasada por la coincidencia con un proceso de cambio político que limitaba las expectativas y los márgenes de maniobra. Porque, si este tipo de medidas debe ser negociado con todos los sectores de nuestra sociedad, ¿quiénes iban a ser antes de ahora los protagonistas de acuerdos que afectan a toda la comunidad, con muy distintas ideologías e intereses?

¿Acaso unos partidos políticos que antes del quince de junio no sabíamos qué asistencia popular tenían?

¿Acaso unos sindicatos que, o bien eran clandestinos, o bien tenían una difícil existencia, fruto de su prohibición durante casi medio siglo?

¿Acaso unas organizaciones empresariales en las que no se consideraban representadas las empresas?

¿Acaso todo un entramado de relaciones sociales en período de cambio, y cuyo consenso no podía ser en ningún caso garantía para el cumplimiento de las medidas que se adoptarían?

Mientras no hubiera interlocutores válidos, no podía haber soluciones pactadas. En ese diagnóstico coinciden estudios tan imparciales como los informes de la OCDE sobre nuestro país.

Y hay que decir, en justo reconocimiento del grandioso testimonio de madurez de nuestro pueblo y de la función integradora y de moderación de la Corona, que el precio pagado por la transición a la democracia no ha sido tan elevado como correspondía a tales deficiencias políticas y sociales. Y hay que decir también que, una vez superadas, era inaplazable tratar de encontrar una solución inmediata a los problemas económicos de cada día.

Ya el pasado trece de junio, dos días antes de las elecciones, al solicitar su voto, dije textualmente:

«Puedo prometer, y prometo, dedicar todos los esfuerzos a lograr un entendimiento social que permita fijar las nuevas líneas básicas que ha de seguir la economía española en los próximos años.»

Prometí también gobernar desde la moderación, el diálogo y el pacto. Y ahí están los primeros resultados. Los acuerdos que se conocen como los «Pactos de la Moncloa» constituyen un encomiable esfuerzo por parte de todas las fuerzas políticas para construir una palanca que levante la economía del país.

Las líneas de actuación de los acuerdos se alcanzaron desde posiciones ideológicas muy distintas. Son, por tanto, una respuesta de pleno sentido democrático ante la crisis económica. Los acuerdos constituyen una demostración del sentido de la responsabilidad de los grupos políticos del país. Todos ellos han dado una gran muestra

de su capacidad de transigencia para encontrar soluciones comunes ante la gravedad del momento.

Pero, además, los acuerdos son una clara demostración de la coherencia de una política que partiendo de las metas propuestas en los mensajes de la Corona, ha tenido siempre un claro horizonte de objetivos y no ha renunciado a ninguno de ellos por razones coyunturales o de pragmatismo político.

Todos ustedes han podido oír en esta pantalla la voz de cada uno de los firmantes del Pacto; la voz de los partidos políticos que obtuvieron, con los votos de los españoles, la totalidad de los escaños del Congreso de Diputados. No voy a añadir ni un solo acento a sus opiniones.

Sin embargo, creo que es mi obligación, como máximo responsable de la acción política, explicarles a ustedes en qué consiste el programa de saneamiento y reforma de nuestra economía y, sobre todo, cuál es el papel que nos corresponde jugar para que tenga éxito a corto plazo, a todos nosotros, y, por tanto, también a ustedes, protagonistas y destinatarios de los errores y de los aciertos que tengamos.

Existen básicamente cuatro variables sobre las que podemos y vamos a actuar para que la economía nacional y, por tanto, la de cada familia española, se sitúe en niveles de normalidad, seguridad y bienestar.

Primero, hay que evitar, y vamos a evitarlo, que suban los precios de una manera disparatada.

Segundo, es imposible que no suban los precios si el alza de los salarios y de las rentas fuese superior a lo que permite la situación general de nuestra economía.

Tercero, también es imposible que no suban los precios si no se disciplina y reduce el crecimiento de la cantidad de dinero y del crédito.

Y cuarto, hay que evitar, y vamos a evitarlo, que España deba a otros países o a Organismos internacionales más de lo que nos deben a nosotros o de lo que podamos devolver sin excesivas tensiones y dificultades. Para ello hay que exportar más y hay que reducir las importaciones, lo que hacía inevitable actuar, como se hizo, sobre el valor y la cotización real de la peseta en relación con las otras monedas.

Pues bien, a la vista de estos hechos, el Gobierno y los partidos políticos nos hemos propuesto los siguientes compromisos que vamos a cumplir:

- Hacer que la cantidad total de dinero no crezca en mil novecientos setenta y ocho más de un diecisiete por ciento, porque si no se disciplina el crecimiento del dinero y el crédito, la inflación no disminuirá.
- Lograr que los salarios no crezcan más de un veintidós por ciento en su masa global, pero con un horizonte muy claro: conseguir que crezcan más los salarios más bajos.

- Asegurar que las alzas de precios no superen los límites tolerables, que para mil novecientos setenta y ocho han de estar en ese mismo tope del veintidós por ciento. Para lograr este objetivo habrá que conseguir una desaceleración, es decir, una reducción en el ritmo de crecimiento mensual de los precios durante todo el año mil novecientos setenta y ocho, de forma que ese ritmo de crecimiento sea al final del año la mitad del de los últimos meses de mil novecientos setenta y siete.
- Garantizar que la política fiscal haga pagar más a quien más tiene y recibir más del Estado a los que tienen menos.
- Introducir toda una serie de modificaciones en nuestros comportamientos, de manera que el sistema económico sea más eficiente, más justo y más progresivo.
- Conseguir que exportemos más y que limitemos las importaciones a los mínimos necesarios para no frenar la producción.
- Si todo esto se cumple —y es seguro que se cumplirá— habremos conseguido frenar la inflación, equilibrar nuestro comercio con los demás países y, en definitiva, sanear nuestra economía y reformar sus estructuras.

Todo está entrelazado. Como he dicho antes, frenaremos los precios si los salarios se mantienen en los niveles establecidos, si se disciplina y reduce el crecimiento de la cantidad de dinero y del crédito. Y si los precios se frenan nuestra economía será más competitiva y podremos ganar nuevos mercados exteriores y exportar más.

Pero hace falta mucho más, señoras y señores: Hace falta, aunque no sea más que para paliar ese gran cáncer social que es el paro, invertir y crear nuevos puestos de trabajo. El Estado va a dar ejemplo, aumentando los gastos de inversión y limitando el crecimiento de sus gastos de consumo. Pero la labor del Estado sería ineficaz sin la colaboración de todos los ciudadanos.

Ustedes se preguntarán cómo han de prestar esta colaboración. La respuesta es muy sencilla: para relanzar las inversiones, entre otras medidas, es absolutamente imprescindible aumentar el ahorro. No existe —quiero que quede perfectamente claro— otra fórmula mágica. Los españoles, todos los españoles, tenemos que ahorrar más.

En resumen, con la mirada puesta en nuestro presente, lo fundamental es que seamos capaces de limitar nuestras pretensiones de ganar más, aceptando ajustar nuestros ingresos a las posibilidades globales de la economía española y que seamos capaces de reducir el consumo.

Sobre la base de una estabilidad asegurada y de un equilibrio económico real, es esencial para el futuro de nuestra economía promover y reactivar las inversiones canalizándolas hacia los sectores más productivos y hacia aquellas actividades capaces de generar un mayor número de puestos de trabajo.

Ahora bien, este planteamiento tan sencillo, aparentemente elemental, debe tener un motor básico que lo anime: un renovado espíritu de trabajo por parte de todas las clases sociales.

Porque, señoras y señores, seamos sinceros: tenemos que trabajar más. España no puede permitirse el lujo de seguir perdiendo decenas de millones de horas de trabajo al año. España no puede permitirse el lujo de seguir teniendo una de las productividades más bajas de Europa.

Un país se construye sólido sobre el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos, pero también sobre el trabajo de todos, sobre el esfuerzo de todos, sobre la asunción por todos de sus responsabilidades, que empiezan por el cumplimiento de las propias obligaciones.

De nada servirán pactos y acuerdos, por muchos votos que hayan tenido detrás los firmantes, si el conjunto de los ciudadanos, hombres y mujeres, todos nosotros, no ponemos la parte que nos corresponde en la recuperación de la economía, con un consumo adaptado a las posibilidades de cada uno; con un estricto cumplimiento de las funciones públicas; con un pago puntual e íntegro de los impuestos; con una clara conciencia de nuestra responsabilidad, evitando gastos superfluos y reduciendo el uso de la energía a lo imprescindible.

Si todos sabemos dar respuesta adecuada a este reto, tengo la seguridad de que los sacrificios se transformarán en días de esperanza y, a breve plazo, en días de bienestar.

Si hablo así, señoras y señores, es porque estoy seguro de que lo podemos conseguir. Porque el acuerdo de la Moncloa permitirá que sean corregidos los comportamientos viciosos de nuestra economía. Porque vamos a convertir la austeridad en protagonista de nuestra vida en los próximos meses. Pero vamos a ser austeros todos. El Gobierno y los ciudadanos; la Administración Pública y las administraciones privadas. En la asunción de sacrificios no habrá más exclusiones que las de los más necesitados: las de aquellos que, aunque quisieran, no pueden soportar más cargas ni más esfuerzos.

Nos espera un duro período de saneamiento económico. Cuando lo anuncio, soy consciente de que no estoy ofreciendo vivir en ningún país de maravillas. Pero soy consciente también de que con estas condiciones podremos alcanzar a medio plazo una sociedad más próspera y más justa.

Nos hemos propuesto reformar y relanzar la economía desde perspectivas de justicia y eficacia. Y ésta es la petición del Gobierno y de los partidos: que confíen en nosotros, que participemos todos en esta apasionante tarea de conseguir que los españoles vivamos mejor; que ahorremos y nos sacrifiquemos un poco ahora para que nosotros y nuestros hijos podamos tener una vida más humana, más confortable, más tranquila, más libre y, sobre todo, más justa, lo antes posible.

Como he dicho antes, la situación económica es grave; pero no es insoluble. Es difícil, pero es superable si se parte de la colaboración y el esfuerzo de todos y si se llega por esa vía a un auténtico clima de solidaridad social, desde el que toda empresa común será factible.

He citado la palabra «solidaridad». Antes de escribirla he reflexionado mucho sobre ella. Supone un gran compromiso apelar a su significado. ¿Podremos utilizarla cuando nuestra historia demuestra que sólo se consiguió a través de instrumentos de autoridad? ¿Podemos utilizarla cuando centenares de normas se quedaron sin cumplimiento porque les faltó el apoyo social? ¿Es lícito que apelemos a ella cuando, sin ningún tipo de demagogia, muchos de nuestros males se basan justamente en la más absoluta ausencia de solidaridad?

Mi respuesta es que sí; que podemos apelar a la solidaridad, porque esta palabra y esta llamada no vienen, en esta ocasión solas. Vienen acompañadas de unas reformas profundas que hasta ahora siempre faltaron cuando a los ciudadanos se les pidió algún sacrificio y alguna renuncia. Y lo que es tanto o más importante: vienen secundadas por todas las fuerzas representativas de la izquierda, de la derecha y del centro. Unas medidas que consiguieron tales avales, traen consigo todos los certificados de validez para el tiempo presente.

Les pido, señoras y señores, la comprensión y el sacrificio. Pero tengan la absoluta seguridad de que el Gobierno está decidido a que ese sacrificio sea repartido equitativamente.

Por primera vez en nuestra historia reciente se dan cita todas las condiciones para el éxito de una acción concreta de gobierno:

Primero, absoluta solvencia de las medidas, que han sido preparadas por los mejores equipos técnicos del Gobierno y de los partidos políticos que ustedes han votado.

Segundo, absoluta coincidencia entre todos los partidos para establecer el diagnóstico de la enfermedad que sufre nuestra economía.

Tercero, compromiso de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso para hacerlas cumplir.

Ahora es obligado el compromiso de colaboración de todos los ciudadanos.

Es bien sabido que la forma española de construir una democracia asombró al mundo. También existe expectación por la forma española de iniciar la solución de la crisis económica. Pero no sólo de esos testimonios podemos vivir, sino de nuestra propia capacidad para consolidar lo que con tanto esfuerzo y renuncia hemos logrado crear entre todos.

Puedo decir, porque personalmente lo he vivido, que nunca España fue recibida en Europa con tantos brazos abiertos como ahora; y puedo decir, con la información que poseo como Presidente del Gobierno, que nunca como ahora estuvimos en condiciones de situar al país en el lugar que le corresponde en el concierto de las naciones.

Todo ello no tiene otro fundamento que el admirable ejemplo de un pueblo apiñado en torno a su Rey, en busca de unas condiciones objetivas de superación nacional. Hoy en

nuestra política interior y exterior apenas quedan borroneos. Podrá haber nuevos atentados contra nuestra convivencia. Podrá haber asaltos a la paz civil. Podrá haber dificultades de todo tipo. Pero, con un Gobierno que se compromete a la firmeza desde la autoridad democrática, con la colaboración ciudadana desde la normalidad, con una calma que no debe verse alterada por posibles acciones de grupos antisociales, es posible contemplar con optimismo el futuro que les estamos construyendo a nuestros hijos.

Es obligación colectiva hacer que ese futuro no se deteriore por el lado más débil que ahora tenemos: el económico; pero tampoco éste será problema si, una vez encontradas las bases de relanzamiento, las convertimos entre todos en realidad.

Sé muy bien que la consecución de las metas propuestas comporta la puesta en práctica de medidas que no son populares. Pero no es el aplauso lo que buscamos, sino la eficacia ante unos evidentes problemas de la nación. Y no vamos, por ello, a claudicar de nuestra responsabilidad, porque esa es la principal obligación de un gobernante.

El pueblo español ha conseguido pasar de una situación de libertades muy limitadas a otra de plena democracia. Con ese mismo pueblo, pero con ilusiones renacidas y con enorme esperanza, vamos a edificar un nuevo sistema económico abierto a todos los ciudadanos. Vamos a hacer una política y una sociedad más estable, en un clima de normalidad institucional, con una sociedad entramada, protagonista de sus propios hechos, que no tenga que depender de los avatares personales de los líderes políticos.

Vamos, una vez conseguida la libertad, a ganar ilusionadamente la justicia.